



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario

1983-2023. 40 Años de Democracia

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

GCBA CONTRA SOTO ROXANA LYDIA SOBRE EJECUCION FISCAL - RADICACION DE VEHICULOS

Número: EXP 404708/2022-0

CUIJ: EXP J-01-00404708-3/2022-0

Actuación Nro: 2294239/2023

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

I. Vistos y considerando:

1. El 14/12/2022 el Gobierno local inicia la presente demanda de ejecución fiscal contra **Roxana Lydia Soto**, a fin de perseguir el cobro de una deuda por “*GRAVAMEN DE PATENTES SOBRE VEHICULOS EN GENERAL Y LEY NACIONAL N° 23.514*” con relación al dominio automotor n° KDL994. Ello, por un importe de \$39.027,78 correspondiente a los períodos fiscales del 1/6 de los años 2016 al 2021, conforme surge de la constancia de deuda de autos.

2. Ordenada la intimación de pago, el 21/03/2023 se diligencia una cédula de notificación dirigida a la demandada en el **domicilio fiscal con carácter de constituido** sito en la calle **Almafuerte n° 815, de esta ciudad** (ver informe del Oficial notificador obrante en la actuación n° 18.413.263/2023).

3. El 12/04/2023 ante el silencio de aquélla, se dicta **sentencia de trance y remate**.

4. El 05/06/2023 se presenta **Roxana Lydia Soto** y, en lo que aquí importa, acusa la **nulidad de la notificación de la intimación de pago**. A su vez, opone **excepción de falta de legitimación pasiva** en subsidio.

4.1. En torno al planteo de **nulidad de notificación** señala que, si bien la cédula de intimación de pago fue diligenciada en el domicilio registrado ante el Registro de la Propiedad Automotor, no pudo acceder a la misma dado que en el mes de marzo del año 2011 abandonó dicho domicilio en pos de salvaguardar su vida y la de sus hijos menores de edad.

Explica que desde el año 2007 **padece de violencia por parte de su ex marido** y que durante muchos años evitó cambiar formalmente su domicilio a fin de evitar que su agresor la ubique. Agrega que recién en el año 2022 tramitó su D.N.I. y denunció su domicilio real en la calle Rondeau n° 3.921, piso 3°, departamento “C”.

Aclara que si bien figura como propietaria del dominio n° KDL994, *“no [tiene] la posesión del mismo desde el año 2011 en razón de la violencia de género ejercida por [su] ex marido”*.

En razón de ello, alega que *“no existió posibilidad alguna de anotar[se] del presente litigio mediante la cédula diligenciada en el domicilio de la calle Almafuerte”*.

A su vez, arguye que *“no pueden considerarse válidas las notificaciones judiciales que fueron cursadas a un domicilio real en el que habitaba la persona violenta, sobre la cual existe prohibición de acercamiento”*. Puntualiza que este extremo le impidió oponer en tiempo la excepción de falta de legitimación pasiva.

Por último, asevera que tomó conocimiento de la causa a través de un embargo trabado sobre su cuenta de Mercado Pago y que, en ese momento, advirtió que su cuenta se encontraba bloqueada y que poseía saldo negativo.

4.2. Acompaña documental, cita normativa y jurisprudencia en abono a su postura y solicita que se declare la nulidad de las notificaciones efectuadas en autos.

5. Corrido el traslado pertinente, el GCBA guarda silencio pese a encontrarse debidamente notificado (ver cédula electrónica n° 259.747/2023).

6. El 11/07/2023 el **Ministerio Público Fiscal** dictamina.

7. El 13/07/2023 el tribunal ordena dar intervención al **Observatorio de Género en la Justicia de la CABA** a efectos de que brinde su opinión técnica sobre las aristas del caso que guardan relación con su expertiz.

El 09/09/2023 se expide dicho organismo (conf. archivo adjunto a la actuación n° 2.145.063/2023).



JUZGADO DE 1ª INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 6 SECRETARÍA
Nº11

GCBA CONTRA SOTO ROXANA LYDIA SOBRE EJECUCION FISCAL - RADICACION DE VEHICULOS

Número: EXP 404708/2022-0

CULJ: EXP J-01-00404708-3/2022-0

Actuación Nro: 2294239/2023

8. El 15/09/2023 pasan los autos a resolver.

9. Conceptualización de la nulidad de la notificación y sustento normativo

9.1. Sabido es que los actos procesales se hallan afectados de nulidad cuando **carecen de algún requisito que les impide lograr la finalidad a la cual están destinados**. Ésta no debe interpretarse desde el punto de vista empírico que determina únicamente el cumplimiento del acto sino con un criterio teleológico, ello es, en miras a la función que debe asignarse a cada acto procesal.

Así, debe considerarse que, en definitiva, las finalidades particulares se subsumen en la necesidad de asegurar la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos y que, por lo tanto, la finalidad genérica de todos los actos del proceso confluye en la preservación de una garantía constitucional¹.

En concordancia con los parámetros mencionados, el artículo 134 del CCAyT regula la **nulidad de notificación**. Este artículo prescribe que *“Es nula la notificación que se realiza en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al interesado cumplir oportunamente con los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica”* (resaltado añadido).

Por ello, se ha afirmado que el incidente de nulidad tiene un marco y funciones específicas: **sanear el procedimiento de vicios y errores y mantener su buen orden en miras a garantizar el pleno ejercicio del derecho de justiciables** con anterioridad a un decisorio.

¹ PALACIO, Lino Enrique y VELLOSO, Adolfo Alvarado, *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Explicado y Anotado*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, T IV, p. 524.

En este sentido, ha de señalarse que la interpretación acerca de la existencia de una nulidad debe ser restrictiva² y **reservarse la sanción como última razón frente a la existencia de una efectiva indefensión.**

9.2. En efecto, la gravedad de la irregularidad incurrida en la diligencia debe ser de tal entidad que impida a la persona interesada cumplir oportunamente con los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica.

Es así que, al promover la incidencia en cuestión se debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración de nulidad y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. **Todo dentro del plazo de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto** (conforme artículos 134, 155 y 157 del CCAyT).

9.3. A su turno, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal (t.o. 2022) el **domicilio fiscal** es el legal legislado en el Código Civil y Comercial de la Nación y es el que los responsables deben consignar ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Seguidamente, el artículo 34 estipula que **el domicilio fiscal produce en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio constituido.**

Mientras que el artículo 37 del Código Fiscal citado establece que la persona obligada al pago deberá comunicar y/o informar cualquier modificación de su domicilio ante la AGIP, de lo contrario toda notificación será efectuada en el domicilio fiscal conocido de manera previa por la Administración.

10. Acreditaciones aportadas en autos

10.1. De las constancias de la causa se desprende que el 21/03/2023 se diligenció la cédula n° 70.651/2023 a fin de notificar el auto de intimación de pago en el **domicilio fiscal de Roxana Lydia Soto que surge del título ejecutivo con carácter constituido, sito en la calle Almafuerte n° 815, CABA.**

² FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales*, Astrea, 1999, Ciudad de Buenos Aires, T I, pág. 651.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

GCBA CONTRA SOTO ROXANA LYDIA SOBRE EJECUCION FISCAL - RADICACION DE VEHICULOS

Número: EXP 404708/2022-0

CULJ: EXP J-01-00404708-3/2022-0

Actuación Nro: 2294239/2023

En aquella oportunidad, el oficial notificador la fijó en la puerta de acceso del lugar por no poder acceder a la unidad funcional y no encontrar a persona alguna (ver cédula n° 70.651/2023).

10.2. Por otra parte, se tiene por acreditado que desde el año 2007 la **Sra. Soto ha padecido diversos episodios de violencia de género por parte de su ex pareja** en el seno de la vivienda familiar ubicada en la calle Almafuerte n° 815.

En particular, de la documental aportada se advierte que, frente a esta sensible situación, la aquí peticionaria efectuó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN; y que el **03/03/2011** el **Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 4** dispuso la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento a ella y a sus hijos menores; y que en esa oportunidad aprovechó para huir de su domicilio (Almafuerte n° 815) donde continuó residiendo su victimario³.

A su vez, surge que el **04/01/2013** el **Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 26** dispuso una nueva prohibición de acercamiento al Sr. Díaz, pero en esta ocasión respecto al nuevo domicilio en donde residía la Sra. Soto – Av. Corrientes n° 3645–⁴.

Asimismo, que el **14/03/2013** la otrora **Policía Metropolitana** labró un acta de la que se desprende que en dicho mes aquella fue abordada por el ex marido quien la atacó cuando intentaba retirar a su hijo de la escuela.

Mientras que el **20/03/2013** el **Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 4** dictó una nueva medida de resguardo; y ante reiterados

³ Conf. Medida de resguardo dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 4 del 03/03/2011 adjunta a la actuación n° 1.395.874/2023.

⁴ Conf. Medida de resguardo dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 26 del 03/01/2013 adjunta a la actuación n° 1.395.874/2023.

episodios de violencia, el **05/06/2015** ordenó una nueva prohibición de acercamiento⁵; la cual fue prorrogada el **08/09/2015**⁶.

10.3. Por último, en torno a la **temporalidad del planteo**, se apunta que no existe documental en autos que acredite fehacientemente la fecha en la que la Sra. Soto tomó conocimiento del acto en crisis; mientras que, corrido el pertinente traslado el GCBA guardó silencio.

En razón de ello, el principio de tutela judicial efectiva y la garantía de defensa en juicio demandan adentrarse en el estudio del planteo de nulidad.

11. Ponderación de la decisión a arribar a la luz de la perspectiva de género

11.1. En este estado, se impone como deber de la magistratura el interpretar las normas jurídicas a la luz del principio constitucional y convencional de **tutela judicial efectiva**⁷.

En particular, la condición de mujer, jefa de hogar y víctima de violencia de género⁸ debidamente acreditada de quien aquí peticiona la nulidad de la notificación, da cuenta de que es una destinataria necesaria del especial cobijo brindado por el sistema jurídico a las mujeres en **condiciones de vulnerabilidad**⁹. En efecto, se

⁵ Conf. Medidas de resguardo ordenadas por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 4 los días 20/03/2023 y 05/06/2015, adjuntas a la actuación n° 1.395.874/2023.

⁶ Prórroga de la Medida de resguardo ordenada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 4 el 08/09/2015 adjunta a la actuación n° 1.395.874/2023.

⁷ Cuya consagración fluye del Preámbulo y en los artículos 18, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. En el ámbito local, emerge de los artículos 12, 14 y 108 de la Constitución de la Ciudad.

⁸ De consuno con el artículo 2 de la ley n° 4.343 la violencia contra las mujeres es “...*toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes...*”.

⁹ A modo de ejemplo y de forma no taxativa, se citan las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad; el Protocolo de Actuación Judicial para Casos de Violencia de Género; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Observación General No. 19 “*La violencia contra la mujer*”; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “*Convención de Belem do Pará*”; la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la ley n° 26.485, ratificada por la ley local n° 4.203; entre muchas otras normas.



JUZGADO DE 1ª INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

GCBA CONTRA SOTO ROXANA LYDIA SOBRE EJECUCION FISCAL - RADICACION DE VEHICULOS

Número: EXP 404708/2022-0

CULJ: EXP J-01-00404708-3/2022-0

Actuación Nro: 2294239/2023

señala que la **victimización**¹⁰ y el **género**¹¹ constituyen causas de vulnerabilidad conforme las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad¹².

En esta línea, cobran particular virtualidad las disposiciones del documento “Estándares de protección de los derechos humanos de las mujeres”¹³, según el cual, uno de los deberes del Estado es **interpretar y aplicar el derecho positivo con perspectiva de género**¹⁴.

11.2. Desde esta atalaya, una aplicación automática de la letra fría de la norma importaría tener por satisfecha una notificación en un domicilio en el que la ejecutada ha acreditado fehacientemente que no reside desde el año 2011. Ello importa, a todas luces, soslayar el objetivo primordial de la notificación que es, precisamente, **anoticiar fehacientemente** acerca de lo que se pretende comunicar¹⁵.

En concreto, no se desconoce la obligación formal de denunciar cualquier cambio de domicilio ante la AGIP. Empero, tal como fue puesto de resalto por el **Observatorio de Género de la Justicia de la CABA**, exigir a la Sra. Roxana Soto que “*informe a la agencia de recaudación de impuestos su cambio de domicilio, en un contexto de doble judicialización, conflictividad y sobrecarga de tareas de cuidado,*

¹⁰ Ver regla n° 5.

¹¹ Ver regla n° 8.

¹² Se recuerda que el objetivo de este instrumento es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, directa ni indirecta, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que les permitan el pleno reconocimiento y goce de los Derechos Humanos que les son inherentes ante los sistemas judiciales. Conf. “*Finalidad*” de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

¹³ Disponible en: <https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/08/estandares-de-proteccion-de-derechos-humanos-de-las-mujeres>

¹⁴ CORONELLO, Silvina, *Resignificación del principio de tutela efectiva en materia tributaria desde una perspectiva de género*, doctrina tributaria ERREPAR, EOLDC102830A, diciembre de 2020.

¹⁵ GOZAINI, Osvaldo, *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado*, La Ley, 3° edición actualizada y ampliada, año 2011, T. I., p. 725.

máxime cuando ni siquiera estaba en posesión del bien sobre el que recae el cobro de patentes, puede ser interpretado como un extremo de violencia institucional” (destacado añadido).

11.3. Así las cosas, tal como recuerda el maestro Couture, las nulidades no tienen por finalidad satisfacer caprichos formales sino enmendar perjuicios efectivos que hubieren surgido de la desviación de los métodos de debate, cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes¹⁶, circunstancia que acontece en autos.

11.4. A la luz de lo expuesto, **corresponderá hacer lugar al planteo de nulidad de notificación incoado por la ejecutada.**

Por ello, **SE RESUELVE: hacer lugar al planteo de nulidad de la cédula de notificación n° 70.651/2023 y de todo lo actuado con posterioridad**, sin imposición de costas dado que la demandada está representada por el Ministerio Público de la Defensa.

Regístrese y notifíquese por Secretaría a las partes, al Ministerio Público Fiscal y al Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad.

II. En atención a lo resuelto en el punto I *ut supra*, a lo solicitado por la demandada, a la medida ordenada el 01/03/2023 y diligenciada (ver fondos inmovilizados conf. actuación n° 1.435.647/2023), se ordena al Banco Central de la República Argentina que **levante el embargo ordenado** a través del Sistema de Oficios Judiciales (SOJ) –referido en las Comunicaciones “A” n° 6.281, 6.286 y 7.061– sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuenta títulos, fondos comunes de inversión y/o cualquier otro activo financiero de titularidad de la parte demandada por la suma reclamada en autos, con más el 30 % que se presupuesta provisoriamente para responder a intereses y costas.

Se hace saber al Gobierno local que deberá acreditar en autos el diligenciamiento de esta orden judicial en el término de 2 (dos) días de efectuado y, en su caso, deberá informar el resultado de la medida decretada.

¹⁶ COUTURE, Eduardo J, *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, Cuarta Edición, Editorial B de F, 2007, p. 390.



Poder Judicial
Ciudad de Buenos Aires